

dad de Pachuca; el parecer fiscal y la sentencia del inferior; y considerando: que es terminante la violación del artículo 18, por haber sido retenidos en prisión los quejosos, sin los requisitos que ordena la ley fundamental.

Con fundamento de los artículos 101 y 102, se declara: que se confirma la sentencia del Juez de Distrito, que ampara y protege á los CC. José Eugenio Hernández, Hermenegildo Pérez y Leonides Rubio.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, archívese á su vez el Toca y lo acordado.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Orlaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 11 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, Oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por el Síndico municipal de Tejupam y particular coadyuvante, Santiago Arroyo, contra la autoridad política del Distrito de Teposcolula, que según afirman, se avocó el conocimiento de un litigio, sobre posesión de terrenos, que el común expresado seguía contra el de Tamazulapam.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Manuel T. Orozco, Gefe superior de Hacienda en el Estado, como promotor accidental en el juicio de amparo promovido por los de Tejupam, alegando en definitiva, ante V. respetuosamente exponer: que en dicho juicio se versan varias cuestiones; pero que pueden reducirse á dos: la primera que puede formularse de esta manera: ¿el reglamento de 25 de Marzo de 1862, es fundado en la carta fundamental? Sin la ley de 31 de Enero de 1864, su reformadora, claro que no; en el citado, se constituye una autoridad subalterna del ejecutivo en Juez (el Gefe político, cualquiera que sea, y el artículo 50 de la Constitución federal, expresamente claro en esta materia, dice así: "El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial. Ninguna podrán reunirse dos ó mas de estos poderes en una persona ó corporación ni &c".

Ahora mas, el artículo 18 de la misma ley fundamental, dice: "En la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales". El reglamento de 25 de Marzo de 1862 erige un tribunal especial, cual es la Gafatura política: luego en esta parte es anti constitucional; reune el poder ejecutivo y judicial en una sola persona, dedúcese claramente

que tambien es en este otro modo anticonstitucional; y así violando expresamente los artículos 13 y 50 de la Constitución federal, debe resolverse en justicia conforme á la fracción 13, del artículo 101 que dice: que los tribunales de la federación resolverán toda controversia que se suscite: por *leyes ó actos* de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales; y no cabe la segunda parte del artículo 102, por que aquí (en este juicio) se trata de todos y cada uno de los de Tejupam que se consideran agravados por el reglamento de 25 de Marzo de 1862, y en ellos juzgan violadas las garantías que otorga la Carta fundamental de la República. La segunda cuestion es la siguiente: ¿El Gefe político de Tamasulapam juzgó en el interdicto promovido por los de Tejupam y Tamasulapam, lo mismo que en el juicio promovido por Santiago Arroyo? Claro que sí; pues las actuaciones arrojan pruebas y aun fallo. Y este hecho que viola las garantías individuales de los de Tejupam y Santiago Arroyo, está previsto para que se ampare á aquellos en quienes se ha violado la ley de 20 de Enero de 1869, originada por el artículo 101 de la Carta federal). Es inconcuso por lo alegado, que deba amparar la justicia federal, pues, á Santiago Arroyo y á los de Tejupam, y mas cuando es inconsecuente con la Constitución del Estado, el Gobernador de él, atacaba el artículo 26 de la misma, y por lo mismo la ley es anticonstitucionalísima, y el hecho absolutamente atentatorio á la destruccion de la Constitución que arregla el Estado y la República.

Por lo que á V. suplico, se sirva resolver en justicia decretando su amparo.—Protesto lo necesario.&

Oaxaca de Juarez, Noviembre 4 de 1873.
Manuel T. Orozco.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Noviembre 18 de 1873.—
Rodolfo Sandoval.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Noviembre 4 de 1873.

—Visto este juicio de amparo, promovido por el Síndico municipal de Tejupam y particular coadyuvante, Santiago Arroyo, contra las providencias de la autoridad política del Distrito de Teposcolula, que segun afirman, se avocó el conocimiento de un litigio sobre posesion de terrenos, que el comun expresado seguia contra el de Tamasulapam, mandando que se ejecutara de nuevo el fallo pronunciado el 21 de Octubre de 1862, confirmado por el Superior Gobierno del Estado en 26 de Diciembre del mismo año, en cuyo primer fallo se declara: que el comun referido de Tamasulapam, probó bien y cumplidamente, como probar debiera, que poseia quieta y pacíficamente, el 13 de Febrero de 1861, el terreno conocido con el nombre del "Espinal", y que en consecuencia, el reparto de él debia hacerse entre los vecinos del pueblo poseedor, segun el reglamento expedido por el gobierno del Estado, en 25 de Marzo de 1862; fijándose la linea divisora con el de Tejupam, en los puntos Deocoituncani, Yuhuichihachuaní, Yodoratindú, Dunumiti, Ituncillo, Dignigniani, Itunnuzahacani, Itunñuzauduchi, y Yodoncita; y contra el mismo reglamento citado; violándose en las personas de los vecinos de su comun y coadyuvante respectivo, las garantías que les conceden los artículos 13 y 16 de la Constitución federal, de 5 de Febrero de 1857. Visto el informe de la autoridad responsable, constante á fojas 10 vuelta y siguientes, reducido á que el personal actual de la Gefatura del Distrito citado de Teposcolula, mandó amojonar los linderos expresados en la resolucion dictada por otro Distrito personal, en 1862, que tuvo por fundamento legal, el reglamento expresado expedido en efecto por el gobierno del Estado, sobre reparto de terrenos comunales, que les sometió ese conocimiento á los Gefes políticos de los Distritos; la cual providencia, ademas habia sido ya ejecuta-

da, en el mismo año de 1862, en que se dictó, y no habiéndose conformado el comun de Tejupam, mandó el expediente para su revision, al Superior Gobierno del Estado; todo sin tener conocimiento de que en el Juzgado de 1ª instancia de aquel partido estaba pendiente una causa criminal, sobre usurpacion promovida por Tamazulapam, contra los naturales de Tejupam; y teniendo en consideracion.

Primero: que las providencias y reglamentos de que se quejan los interesados, en el caso de que se trata, no han causado, ni causan hasta hora, gravámen alguno que no pueda repararse por los medios y recursos legales ordinarios de un juicio civil; pues la primera providencia versa únicamente sobre posesion interina, caso de haber causado ejecutoria, y de ser hábil esta accion intentada por Tejupam, le queda el recurso al juicio plenario de posesion, ó propiedad, á los terrenos sobre que versó el expediente administrativo, seguido en cumplimiento del reglamento del Estado, de 25 de Marzo de 1862, expedido para la mejor ejecucion del reparto de terrenos de comunidades civiles, mandado practicar por la suprema circular de 5 de Setiembre de 1869, y reglamento de 20 de Octubre del mismo año.

Segundo: que la providencia última de la Jefatura política del Distrito de Teposcolula, lejos de confirmarse por el Gobierno del Estado, se consignó, con los antecedentes que la motivaron, á la Corte de Justicia del mismo, en virtud de lo dispuesto por el decreto de 31 de Enero de 1864, expedido en virtud de facultades extraordinarias, de que gozaba el Gobierno del propio Estado; delegadas por el general de la República, como lo solicitó el mismo quejoso, con anterioridad á este recurso de amparo, segun consta á fojas 23.

Tercero. que negada á las comunidades civiles, tanto por la Constitución general de la República, citada, en su artículo 27 part. 2ª, la capacidad legal para adquirir en propiedad, ó administrar bienes raices,

con la única excepcion que establece, de los edificios destinados al objeto de su institucion, podrá decirse: que en general ni la propiedad de esos terrenos, que no son egidos del comun, podrá demandar, supuesto que no ha justificado que los poseyera antes de la demanda primitiva judicial, anterior tambien á ese expediente.

Cuarto: que aun cuando haya tenido á salvo esa capacidad para solo el objeto de gestionar sobre la propiedad de los terrenos para el cobro de la renta, del seis por ciento anual, en su caso no podrán exigir esos mismos terrenos de los poseedores, segun el artículo 14 de ese reglamento, mas expreso y lato aun que la propia Constitución federal y circular del Estado de 18 de Noviembre de 1857, con quien lejos de atacarla, se concilia muy bien sobre la personería de las comunidades para la deducccion de esas diversas acciones en juicio formal ó para el reparto de los mismos terrenos, si se quiere de una manera firme y valedera y no sujeta á juicios plenarios, ó de propiedad de éxito dudoso, por no haber sido declarado previamente suyo en todas las instancias regulares de un litigio, el terreno en cuestion.

Quinto: que no solo hay juicio pendiente sobre la posesion, y queda la accion sobre propiedad en ese mismo terreno cuestionado, sino que pende la causa de usurpacion anexa con la prueba previa de la propiedad.

Sexto: que los vecinos de Tejupam, bien ó mal están en posesion, segun confiesan, del terreno disputado, y solo abrigaban temores últimamente, de ser despojados por la situacion que suponen de los límites que se pretendiesen fijar, ahora despues, por los de Tamazulapam, fojas 31 y siguientes, y por consiguiente, no hay ni violacion de garantías, ni menos perjuicio alguno verdadero de que, probada, pudiera y debiera amparárseles.

En tal virtud, y con presencia de lo pedido por el Ministerio público, documentos aducidos en el término de prueba, lo alegado por las partes, y cuanto mas tener pre-

sente y ver convino, la justicia federal con fundamento de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Constitución mexicana de 5 de Febrero de 1857, y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, declara: que no ampara ni protege al comun de Tejupam, ni particular coadyuvante Santiago Arroyo, contra las providencias de la autoridad política del Distrito de Teposcolula y reglamento de 25 de Marzo de 1862, expedido por el Gobierno del Estado en virtud de facultades extraordinarias generales, que motivaran este recurso. Hágase saber; publíquese por los periódicos "Diario Oficial" y "Semanario Judicial de la Federación" y remítase este juicio á la Corte Suprema de Justicia, en grado de revision.

El C. Juez 1º suplente de Distrito encargado del despacho por ministerio de la ley, así definitivamente juzgando, lo sentenció, mandó y firmó. Doy fé.—*Juan Ignacio Pagoaga*.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, 14 de Noviembre de 1878.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 14 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el Síndico municipal de Tejupam y particular C. Santiago Arroyo, ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, contra las providencias del Jefe político de Teposcolula que se avocó el conocimiento de un litigio sobre posesion de terrenos que el comun del expresado pueblo de Tejupam seguia con el de Tamazulapam, mandando que se ejecutara un fallo pronunciado el 21 de Octubre de 1862, confirmado por el Gobierno del Estado en 26 de Diciembre del mismo año, con cuyos actos consideran los quejosos violadas las garantías que otorgan los artículos 13 y 16 de la Constitución federal: visto el informe de la

autoridad responsable del acto reclamado; las pruebas rendidas; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la sentencia que pronunció el inferior en 4 de Noviembre del año próximo pasado; y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente; y considerando: que el conocimiento de los juicios sobre posesion, deslinde y otros relativos á terrenos, no es de la facultad del poder ejecutivo sino del judicial, á quien ademas corresponde por medio del juicio respectivo, conocer del valor de los títulos en que la propiedad de las comunidades ó de los particulares se funda: Que el decreto en que se apoya el Juez de Distrito de Oaxaca para creer que el ejecutivo del Estado estaba autorizado para expedir el reglamento de 25 de Marzo de 1862, no expresó esta autorizacion, porque ni el Ejecutivo federal la tenía; que por consiguiente, la providencia reclamada importa una violacion de los artículos Constitucionales que invocan los quejosos.

Con fundamento de esos artículos, y de los 101 y 102 de la misma Constitución, y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta; 1º: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Oaxaca que declaró que la Justicia de la Union no ampara ni protege al comun de Tejupam ni particular coadyuvante C. Santiago Arroyo, contra las providencias de la autoridad política del Distrito de Teposcolula, y reglamento de 25 de Marzo de 1862 expedido por el Gobierno del Estado en virtud de facultades extraordinarias generales que motivan este recurso; y 2º se declara, que la Justicia de la Union ampara y protege al Síndico municipal de Tejupam y particular coadyuvante C. Santiago Arroyo, contra los mismos actos de que se quejan.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Me-

xicanos, y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Lozano.*—*Arteaga.*—*Ordaz.*—*Ramirez.*—*Altamirano.*—*Guzman.*—*Celazquez.*—*Zavala.*—*E. Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 6 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por el C. Vicente Ortigoza, contra la Recaudacion de rentas del Estado, por el cobro que le hace de una contribucion por el capital mobiliario que representa y que fué cuotizado en mayor cantidad que la que antes pagaba.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: el Sr. D. Vicente Ortigoza, entabla amparo con apoyo del artículo 14 de la Constitucion general, contra la oficina de contribuciones directas de esta Ciudad, por que habiéndose valorizado su capital mobiliario en mil quinientos pesos, en Julio del presente año, conforme al artículo transitorio del decreto número 344 alterando la asignacion de cuatrocientos pesos porque antes pagaba, le cobra dicha oficina por la última valorizacion mas alta, la contribucion relativa desde Enero del corriente año, contra lo prevenido en el artículo 43 de la ley orgánica de hacienda de 31 de Diciembre de 1862, que dice ninguna disposicion ha derogado y que previene que solo en los meses de Julio, Agosto y Setiembre de cada año, podrá ser revisado el capital mercantil, para que la alteracion sirva de base á las contribuciones que se cobren, pero hasta del 1º de Enero siguiente en adelante, según el artículo 44 de la misma ley orgánica de hacienda; resultando

TOME V.—PARTE II.

que la oficina mencionada con su cobro, no solo obra contra los artículos citados, sino que ataca en perjuicio del quejoso el artículo 14 de la Constitucion en que se funda el recurso, porque hace surtir un efecto retroactivo á la cuotizacion hecha en Julio, puesto que la toma por base para cobrar desde Enero anterior.

El Sr. Ortigoza ha padecido indudablemente una equivocacion, por no haber consultado los decretos de 12 de Junio de 1867 y los números 143 y 168; por ellos consta, como en su informe lo hace notar el recaudador de contribuciones, C. Muro, que están derogados desde hace algunos años los artículos de la ley de hacienda que cree vigentes el Sr. Ortigoza; que las asignaciones de capitales se deben hacer regularmente en Febrero y Marzo de cada año, calculando el de los causantes con relacion á todo el año desde el 1º de Enero anterior, para que desde entonces sirva de base al cobro de las contribuciones; y que por lo mismo, la oficina recaudadora ni obra contra leyes vigentes en el cobro que hace al Sr. Ortigoza, ni ataca en su perjuicio el artículo 14 de la Constitucion federal, por no aplicar retroactivamente ninguna ley, ni apoyarse en alguna que tenga ese carácter por sus disposiciones.

Concluye por lo expuesto, el Promotor, pidiendo: que la Justicia de la Union lo ampara ni protege á D. Vicente Ortigoza, contra el acto de que se queja.

Guadalajara, 30 de Diciembre de 1873.—Firmado.—*A. Camarena.*

Es copia. Guadalajara, 30 de Diciembre de 1873.—*A. Camarena.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, 14 de Enero de 1874.—Vistos: el C. Vicente Ortigoza, el 22 del próximo pasado Diciembre, entabló ante este Juzgado, juicio de amparo y proteccion de garantías, contra la Recaudacion de ren-